

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 2° del Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado y 296 de 2020 Cámara ***“Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021”***, el cual quedará así:

Adiciónese doce mil millones de pesos moneda legal (\$12.000.000.000) al presupuesto asignado al subprograma 1705 ‘Restitución De Tierras a Víctimas Del Conflicto Armado’ (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas) dirigidos al financiamiento del proyecto de inversión “Implementación del programa de restitución de tierras rurales a las víctimas de despojo y/o abandono de predios Nacional” vigencia 2021, de modo tal que el presupuesto total asignado a este proyecto sea de ciento ochenta y siete mil trescientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y cuatro mil, veinte y ocho pesos moneda legal (\$187,375,784,028).

Estos doce mil millones de pesos moneda legal (\$12.000.000.000), procederán de una deducción del presupuesto de inversión de la sección 0201 de la Presidencia de la República o de las secciones que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público considere conveniente..

Modifíquese el artículo 46° del Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado y 296 de 2020 Cámara ***“Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021”***, el cual quedará así:

ARTÍCULO 46o. Las entidades responsables de la reparación integral a la población víctima del conflicto armado del orden nacional darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de dicha población y, en especial, a la población en situación de desplazamiento forzado y a la población étnica víctima de desplazamiento, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011, así como a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento.

Estas entidades deberán atender prioritariamente todas las solicitudes de Ayuda Humanitaria de Emergencia y Transición constituyendo éstas un título de gasto prevalente sobre las demás obligaciones de la entidad.

Se priorizará también lo relacionado con las órdenes de formalización de las sentencias de restitución de derechos territoriales de los grupos étnicos.


FELICIANO VALENCIA MEDINA
Senador-MAIS
Circunscripción Especial Indígena


ABEL DAVID JARAMILLO LARGO
Representante a la Cámara-MAIS
Circunscripción Especial Indígena

JUSTIFICACIÓN

EL derecho a la formalización del territorio colectivo de los pueblos indígenas emana como una de las manifestaciones más claras de los derechos de los grupos étnicos. Los artículos 63, 329 y 330 de la Constitución de 1991 desarrollan algunas de las características del derecho a la propiedad colectiva que la sentencia T-387 de 2013 sintetiza de la siguiente manera:

“El derecho fundamental a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas comprende: (i) el derecho a constituir resguardos; (ii) la protección contra actos de terceros; (iii) según los precedentes este derecho es además un medio para garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos indígenas”

Adicionalmente, La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21 reconoce el derecho a la propiedad, en cual ha sido desarrollado, en lo que respecta a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, ampliamente por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como diferentes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas sobre áreas de ocupación ancestral.

Ligado a lo anterior, de acuerdo con la información de la Unidad de Restitución de Tierras para pueblos indígenas, estipulado en el Decreto Ley 4633 de 2011, para agosto de 2020 existen 18 sentencias proferidas por los jueces y magistrados de la jurisdicción civil especializada de restitución de tierras que contiene órdenes dirigidas a constituir, ampliar, sanear, clarificar y alindar resguardos, 60 medidas cautelares decretadas, varias de ellas con medidas dirigidas a la materialización de la formalización de la propiedad colectiva y garantizar la seguridad jurídica sobre dicha propiedad, igualmente existen 240 actos administrativos que recomiendan rutas de protección étnica para territorios étnicos. En la mayoría de estas decisiones judiciales y administrativas que comportan los procedimientos de formalización de la propiedad colectiva no se ha podido materializar por la ausencia de recursos en la Agencia Nacional de Tierras e incluso en la Unidad de Restitución de Tierras cuando tiene la competencia para adquirir mejoras o predios.

Esta situación tiene un correlato en el aumento de órdenes judiciales dirigidas a culminar los procedimientos agrarios que debe adelantar el Estado, a saber, constitución, ampliación, clarificación/reestructuración de resguardos coloniales y republicanos, además de protección de la posesión de territorios ancestrales, tradicionales (Decreto 2333 de 2014) y la conversión de reservas indígenas a resguardos de acuerdo al Decreto 1397 de 1996. Dichas órdenes en su mayoría están a la espera de cumplimiento.

En debate de Control Político adelantado por el Senador Feliciano Valencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la ANT en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado (Valencia, 2020), la ANT informa que durante el periodo 2018-2020 que corresponde al gobierno de Iván Duque, el consejo directivo de esta entidad ha constituido 22 resguardos y ha aprobado la ampliación de cinco, lo que en total suma 276.315 ha. + 4.649 m² para las comunidades indígenas de todo el país. Lamentablemente, la formalización de dichos territorios responde apenas al 5% del total de solicitudes existentes y es inexistente, para este periodo a formalización, casos producto de órdenes judiciales o administrativas de restitución de derechos territoriales de grupos étnicos.

El rezago en los procesos de dotación y de reconocimiento a los derechos territoriales indígenas afecta de manera diferenciada a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta el alto riesgo de desaparición física y cultural producto del conflicto armado al que están expuestos, pero adicionalmente implica un alto riesgo de múltiples incidentes de desacato, sanciones disciplinarias o procesos judiciales en la jurisdicción interamericana por el desconocimiento de los derechos de los grupos étnicos.

En oficio dirigido por la ANT al Departamento Nacional de Planeación con radicado No. 20195001037821, la Dirección de Asuntos Étnicos de esta entidad afirma que en lo que refiere al total de compromisos en materia de derechos étnicos territoriales, para 2019, se necesitarán cerca de \$3,5 billones de pesos para las comunidades de pueblos indígenas y el cumplimiento de sentencias judiciales asociadas a la compra de predios. Este dato es de

suma importancia porque indica un aproximado de los recursos que el gobierno debe asignar para garantizar los derechos territoriales indígenas.

De otro lado, el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que hace seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, sobre el estado de cosas inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado de pueblos indígenas ha establecido como uno de los factores subyacentes al conflicto armado la falta de formalidad sobre la tierra. En razón a ello, la dilación injustificada en los procesos de formalización de la propiedad colectiva propician el desplazamiento forzado de las comunidades y pueblos, quienes aun cuando ostentan la posesión tradicional de los territorios, no tienen la formalidad de la propiedad y/o la seguridad jurídica sobre la misma, en tanto no cuentan con el título que debe otorgar el Estado, a través de la ANT.

En razón a lo expuesto se solicita un aumento de doce mil millones de pesos moneda corriente (\$12.000.000.000) al subprograma 1705 'Restitución De Tierras a Víctimas Del Conflicto Armado' (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas), de modo tal que el presupuesto asignado permita **priorizar las acciones adicionadas en el artículo 46° relacionado con las órdenes de formalización de las sentencias de restitución de derechos territoriales de los grupos étnicos.**